

C.A. de Temuco

Temuco, ocho de marzo de dos mil veintidós.

**Vistos:**

Que ha ingresado la causa Rol Interno del Tribunal del Trabajo de Temuco, número O-134-2021, Rol Corte número 337-2021; caratulada *“González con Comercial Eccsa S.A.”*, relativa a despido injustificado y cobro de prestaciones laborales en procedimiento ordinario laboral; para conocer del recurso de nulidad, deducido por la parte demandada, en contra de la sentencia de fecha 29 de julio de 2021, pronunciada por la Juez Titular del referido Tribunal, Sra. Marta Paola Álvarez Basáez, por la que se hizo lugar a la demanda, declarando que el despido que afectó al actor fue injustificado, condenando en consecuencia a la demandada al pago de las siguientes prestaciones: a) Incremento del 30% respecto de la indemnización por años de servicio: \$6.251.708.- b) Devolución de lo descontado por concepto de AFC \$2.368.414.

Como se ha adelantado, impugna dicha sentencia el apoderado de la parte demandada, Sr. Sebastián Bock Soto, quien funda su recurso en dos causales, la primera de manera principal, la segunda subsidiaria. En primer término se asila en lo dispuesto en el artículo 478 b) del Código del Trabajo, norma que mandata anular aquellas sentencias que han sido dictadas con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. En segundo término funda su impugnación en la causal del artículo 477 del Código Laboral, denunciando como infracción de ley, la violación a lo dispuesto en los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728.

Solicita en consecuencia, se haga lugar al recurso de nulidad fundado en las causales invocadas y se proceda a invalidar o anular la sentencia definitiva, rechazando la demanda de autos en lo pertinente, con costas.

**Considerando:**

**Primero:** Que la primera causal de invalidación que será analizada es la planteada de manera principal, esto es, la del artículo 478 b) del Código del Trabajo, que indica que el recurso de nulidad procederá respecto de la sentencia definitiva *“b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”*. Funda su recurso indicando que el Tribunal obvia ciertas máximas de las experiencia y principios de la lógica, específicamente el principio de no contradicción, entendiendo, por tal aquel que se sustenta en que una cosa, no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo;



pues según ha resultado acreditado en autos, se configuran todos y cada uno de los elementos establecidos en la carta de despido, no obstante, el Tribunal estima que no hay razones para aplicarlo, exigiendo por tanto, una carga adicional a su parte. De este modo, prosigue el recurrente, no es necesario que la carta de despido se refiera pormenorizadamente a todos y cada uno de los acontecimientos que han llevado a la empresa, como unidad y establecimiento, a una baja sostenida en la productividad en los términos que fue expuesto por los testigos, cuya declaración desestima el Tribunal de instancia, sin referencia a norma legal que así lo establezca. Añade que se debe distinguir, además, la posibilidad de que las necesidades de la empresa, lo sean respecto a la unidad o un establecimiento, pues según se expone en la carta acompañada, esta afecta especialmente a la tienda en que se desempeña, por lo que mal podría aplicarse la premisa absoluta de la realidad del retail a nivel nacional. En este sentido, en la contestación de la demanda se indica que se ha estimado que la necesidad puede afectar tanto a la unidad jurídica - empresa- como a cualquiera de sus unidades productivas -establecimientos o servicios-, es decir, no sólo a la empresa considerada como conjunto, sino también a uno o más establecimientos de la misma –a modo ejemplar, una tienda. Apunta que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha estimado que la reestructuración de una empresa se puede subsumir en la causal en análisis.

Agrega que resulta pertinente analizar que los testigos de su representada fueron contestes en indicar que existió una baja en la productividad que se tradujo en una reestructuración, lo que implicó la eliminación del cargo del Sra. González siendo absorbido por los otros asistentes de la misma tienda, además quedó asentado en el proceso que el cargo de la actora no fue reemplazado de manera alguna. En este sentido, la baja en la productividad aducida y aludida por los testigos de manera concreta constituye razón suficiente para la reestructuración, razón por la cual se ve vulnerado este principio de la lógica. De esta manera, en razón de todo lo expuesto, es que existe una infracción al principio de no contradicción pues una cosa no puede ser y no ser a la misma vez. Apunta que su representada acreditó las bajas a la productividad y la reestructuración a través de los testimonios presentados en juicio, los que no fueron considerados al momento de dictar la sentencia. Indica que queda claro, que el tribunal dictó sentencia contrariando abiertamente las reglas de la sana crítica, pues no existe razón suficiente que le permita llegar al sentenciador a dicha



conclusión, que el Tribunal no apreció la prueba como exige la ley, dado no tomó en cuenta las declaraciones de los testigos, por lo que, tampoco estaría cumpliendo con los requisitos de la sentencia, establecidos en el artículo 459 N°4, en cuanto es claro en disponer que: *“La sentencia definitiva deberá contener: 4.- El análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación”*.

**Segundo:** Que de los reproches que se contienen en el recurso, el primero que se desechará será el relativo a que la sentenciadora no habría “tomado en cuenta” las declaraciones de los testigos de su parte, desde que tal como el mismo impugnante reconoce en su libelo, tal vicio de concurrir no es constitutivo de la causal de nulidad invocada, sino que de otra, puntualmente la del artículo 478 e) en relación al artículo 459, ambos del Código del Trabajo.

**Tercero:** Que decidido lo anterior, cabe hacerse cargo del argumento central de esta causal. Se invoca una infracción por parte de la sentencia que se revisa a las reglas de la lógica (concretamente al principio de la no contradicción) y a las máximas de la experiencia. El aludido principio, nos indica tal como señala el propio recurrente, que una cosa no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo. Pues bien, era cargo de la parte recurrente señalar en concreto cómo se verificaría tal vicio en la sentencia que se revisa, es decir, especificar qué conclusiones del Tribunal eran contrapuestas a otras arribadas por la misma sentenciadora, sin embargo, no cumplió con dicha carga, centrándose en cambio en un reproche propio de la instancia.

En efecto, revisado el libelo recursivo, se observa que el recurrente discrepa del razonar de la sentenciadora del grado, pues toda su argumentación dice relación con que se habrían logrado acreditar todos y cada uno de los elementos referidos en la carta de despido, añadiendo como argumento que basta demostrar las necesidades de un determinado establecimiento para entender como justificado el despido, es decir, que no es necesaria una afectación de la unidad jurídica - empresa- bastando que tal defecto se verifique en torno a sus unidades productivas, esto es, determinados establecimientos o servicios. Tal razonar del recurrente es totalmente válido de ser planteado, pero resulta ajeno a un recurso como el que nos convoca, en que dado su carácter de extraordinario limita la competencia de esta Corte al análisis del motivo de invalidación invocado; no indicándose por el recurrente contradicciones del



Tribunal, sino que derechamente discrepando en torno a la forma en que valoró la prueba y calificó jurídicamente los hechos que dio por establecidos.

Así las cosas, restringiéndose el recurso a denunciar una violación al principio de la no contradicción, sin profundizar en cómo se verificaría ello, forzoso será desechar en esta parte el recurso.

**Cuarto:** Que se menciona también por el recurrente, una violación a las máximas de la experiencia. Tales han sido entendidas como "*normas de valor general, independientes del caso específico, pero como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie*"; pues bien, el recurrente no ha dedicado pasaje alguno de su recurso a expresar cómo se verificaría este defecto, explicando cuál o cuáles en concreto serían tales normas de valor general que habrían sido pasadas por alto. Cabe reiterar acá que pesa sobre los hombros del recurrente la carga de fundar su recurso, no bastando para ello un mero cumplimiento formal, en el sentido de simplemente señalar una infracción a uno de los elementos integrantes de la sana crítica, sino que debe profundizarse en las razones del por qué ello se afirma, de manera tal que el Tribunal de nulidad se encuentre en condiciones de decidir sobre la concurrencia o no del vicio que se alega, desde que la competencia de la Corte queda limitada precisamente por los márgenes que el respectivo recurso le otorga.

**Quinto:** Que por las razones expuestas el recurso será rechazado en esta primera causal, correspondiendo el análisis de la planteada de manera subsidiaria.

**Sexto:** Que indica el recurrente que la sentencia definitiva de autos ha sido pronunciada con vicio de infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo al ordenar la devolución de aporte del empleador al seguro de desempleo respecto de la demandante. Así, el presente recurso se funda en la causal de nulidad prevista en el artículo 477 inciso 1° del Código del Trabajo Infracción de ley, específicamente al infringir el artículo 13 y 52 de la ley N°19.728 que establece el seguro de desempleo. Luego de transcribir el primero de los referidos artículos y el considerando duodécimo de la sentencia que se revisa, señala que la sentenciadora desatiende el tenor literal de dicha norma y ordena la devolución de descuento por aporte del seguro de desempleo realizada en el finiquito. Apunta que la infracción de ley se produce debido a que el legislador



no ha realizado referencia a si el despido por necesidades de la empresa es o no justificado, remitiéndose únicamente a la potestad y determinación del empleador, ello con clara contravención al artículo 19 del Código Civil. Señala que el artículo 13 de la ley en comento sólo exige que el despido se haya efectuado por aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo, situación que efectivamente ocurre en estos autos. Agrega que no se puede pretender que la declaración de injustificado del despido, implique que el mismo ya no hubiere sido efectuado por dicha causal, pues en ese caso se incurriría en el absurdo que la trabajadora no podría cobrar el seguro de cesantía en los términos que lo hizo, pues ella cobra el seguro por haber sido despedido por la causal de necesidades de la empresa. Agrega que si con posterioridad al despido se ha determinado que éste es injustificado, la ley N°19.728 no dispone que se deba devolver el monto descontado y es por ello por lo que no podrá el sentenciador aplicar sanciones no se encuentren establecidas en la ley. Así las cosas, e independiente de los efectos que pueda conllevar la declaración del despido como injustificado, su efecto será el mismo, es decir, que al trabajador le ha puesto termino a su contrato de trabajo en virtud del artículo 161 del Código del trabajo, esto es, "Necesidades de la empresa", por lo que, ante una u otra situación, acogándose o rechazándose la demanda, este concepto reclamado es del todo improcedente, en vista a que el despido no puede quedar sin causal. Apunta que en relación con lo anterior, cabe tener presente que artículo 52 de la misma ley N°19.728 que establece el Seguro de Desempleo, dispone que, cuando el trabajador accionare por despido injustificado, indebido o improcedente, en conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo, o por despido indirecto conforme al artículo 171 del mismo Código, podrá disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, en la forma señalada en el artículo 15(...) luego el inciso 2° de la misma norma establece que: “si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13.” De lo anterior, prosigue el recurrente, se desprende claramente que es la misma ley que se ha aplicado erróneamente se puso en la situación de que el trabajador demandare por despido injustificado, como es el caso de autos, señalando el pago del seguro de desempleo se realizaría en iguales condiciones, de esta forma en nada altera la posterior calificación que realice un tribunal en justificado o injustificado del mismo. De esta forma, se infringe con lo resuelto el



QRZQYKPEXJ

mandato del artículo 52 de la ley N°19.728 que ordena en casos que el despido sea declarado injustificado pagar el seguro de desempleo y las prestaciones que se deban al trabajador se paguen conforme al artículo 13 de la ley N°19.728. Que, así las cosas, la aplicación de la Ley N°19.728 es procedente al caso, por concurrir las exigencias legales para ello, toda vez, que el artículo 52 contempla expresamente la circunstancia que el trabajador deduzca acción de despido improcedente como ha sucedido en la especie, y luego esta propia norma prescribe que si el Tribunal acoge la pretensión del trabajador, como ocurre en este caso, “deberá” ordenar que el empleador pague las prestaciones conforme al artículo 13. En consideración, aplicando correctamente las normas se debió rechazar la solicitud de la demandante de autos, de devolución del aporte del empleador al seguro de desempleo. Transcribe finalmente el recurrente en apoyo de su tesis, un fallo de la Excma. Corte Suprema de fecha 6 de abril de 2021, dictada en autos Rol n° 26.030-2019.

**Séptimo:** Que, para resolver este segundo reclamo de nulidad, es necesario tener presente -en primer lugar- que en caso de disconformidad del trabajador con la causal de desvinculación laboral impetrada por su empleador, puede éste recurrir al órgano jurisdiccional, quien es en definitiva el que resolverá acerca de la procedencia de las circunstancias y la justificación del despido. Luego, entonces, si el tribunal llamado a conocer de la controversia determina -conforme a sus facultades- que en el caso en análisis la desvinculación del trabajador no obedeció a la causal establecida en el artículo 161 del Código del ramo, mal puede el demandado asilarse en el artículo 13 de la Ley 19.728, para imputar a la indemnización por años de servicios del trabajador las cantidades que cotiza para efectos de su seguro de cesantía, porque el despido no obedeció a necesidades de la empresa. Sostener lo contrario, significaría que bastaría con la mera voluntad del empleador de despedir al trabajador por necesidades de la empresa, sin justificación alguna, para hacer efectivo el descuento, resultando banal la decisión de la sentenciadora en relación a la existencia o veracidad de la decisión de la parte empleadora. En el caso sub judice, por decisión jurisdiccional la desvinculación del demandante no se debió a



necesidades de la empresa y en tal evento, el descuento que pretende la demandada no resulta procedente puesto que el motivo del despido resultó injustificado.

**Octavo:** Que, a mayor abundamiento, el artículo 13 de la Ley 19.728, indica que “*Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios*”, y el inciso segundo indica que se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía. Del tenor de la regla queda claro que una condición sine qua non para que opere es que el contrato de trabajo haya terminado por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo. Luego, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, cabe entender que no se satisface la condición; ya que estimar lo contrario, constituiría un incentivo a invocar una causal errada con el objeto de obstaculizar la restitución o, lo que es lo mismo, validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza –nemo auditur non turpidunimen est- y significaría además que un despido injustificado, en razón de una causal impropia, produciría efectos, a pesar que la sentencia declare la causal improcedente e injustificada. De ahí que deba entenderse que la sentencia que declara injustificado el despido por necesidades de la empresa priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley 19.728.-

**Noveno:** Que finalmente cabe tener presente que mal podría validarse la imputación a la indemnización, si lo que justifica ese efecto ha sido declarado injustificado. Entenderlo de otra manera, tendría como consecuencia que declarada injustificada la causa de la imputación, igualmente se le otorgaría validez, verificándose así una inconsistencia, pues por un lado el despido sería injustificado, pero por otro la imputación, consecuencia del término por necesidades de la empresa, mantendría su eficacia.



**Décimo:** Que, en concordancia con lo anterior, el tribunal, al contrario de lo que estima el recurrente, aplicó correctamente las normas que se dicen infringidas, no incurriendo en los errores de derecho que éste denuncia, por lo que el recurso en este acápite también será rechazado.

Por lo expuesto, y visto, además dispuesto en los artículos 474 y siguientes, 480, 481 y 482 del Código del Trabajo, se declara: Que **SE RECHAZA, con costas**, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Sr. Sebastián Bock Soto, en representación de la parte demandada Comercial Eccsa S.A., en contra de la sentencia ya individualizada dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco con fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, la que en consecuencia, no es nula.

Regístrese y agréguese a la carpeta digital.

Redactó Alexis Salvador Gómez Valdivia, Abogado Integrante.-  
Laboral - Cobranza-337-2021.(fcv)





Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministra Maria Georgina Gutierrez A. y Fiscal Judicial Oscar Luis Viñuela A. Temuco, ocho de marzo de dos mil veintidós. Se hace presente que el abogado integrante Sr. Alexis Gómez Valdivia, no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo respectivo, por encontrarse ausente.

En Temuco, a ocho de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

